



POWENCIA DEL C. MINISTRO.
LIC.DAVID FRANCO RODRIGUEZ.
SRIO.AUX,LIC.H.GMO.ARIZA BRACAMONTES.

AMPARO DIRECTO No.-2984/79.
EMIGDIO NICHOLS BLANCO.

A

México, Distrito Federal, Acuerdo de la--
Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
del día veinticuatro de octubre de mil novecientos seten
ta y nueve.

COTEJADA:

1413

V I S T O, para resolver el juicio de ampa-
ro directo número 2984/79, promovido por EMIGDIO NICHOLS
BLANCO, contra el acto de la Junta Especial Número Dos
de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que estima--
violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales y
que hizo consistir en el laudo dictado el veintiséis de
junio de mil novecientos setenta y ocho, en el expedien-
te laboral 110/75, seguido por el quejoso contra el Fe-
rrocarril Sonora-Baja California, S.A. de C.V.; y,

Vo. Bo.

9.7m

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.-Por escrito presentado el dos de
noviembre de mil novecientos setenta y tres, ante la --
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Ba-
ja California, Emigdio Nichols Blanco demandó del Ferro-
carril Sonora-Baja California, S.A. de C.V.: la revoca-
ción del acuerdo de primero de septiembre del año seña-
lado y como consecuencia la reinstalación en su trabajo.

Apoyó su reclamación en los siguientes hechos:

1o.-Que desde hace varios años presta sus servicios a-

la empresa demandada como [REDACTED],
teniendo un expediente limpio y una conducta sin tachas.
2o.-Que la mañana del quince de septiembre de 1972, al-
llegar el tren procedente del Sur, del carro de primera
clase cuyo Portero era él, el Intendente del Andén en esa
ciudad de Mexicali bajó un veliz abandonado en la casi-
lla de dicho carro, siendo esa una labor de rutina del
citado Intendente, y lo depositó en el Almacén a su cui-
dado porque así se lo pidió él. 3o.-Que posteriormente-
se dieron cuenta que dicho veliz contenía marihuana, lo
que se puso en conocimiento de las autoridades competen-
tes, que se le aprehendió y dictó auto de formal prisión;
que alegó como defensa que el referido veliz fue abando-
nado en el coche de primera clase, lo que es verdad, y
no es difícil probar que nunca se ha dedicado a esa --
ilícita actividad y ello con sus antecedentes, buena --
conducta y costumbres, puesto que un traficante no se --
improvisa, y todas las circunstancias están a su favor--
ya que todos los que lo conocen incluyendo a la empresa,
no creen en su culpabilidad; que cree que es una verda-
dera desgracia la que le pasó, "pues para mí una simple
broma, sin calcular las consecuencias, supuesto que ig-
noraba la seriedad del caso." 4o.-Que al dictársele la-
formal prisión, la empresa lo suspendió de su trabajo-
como lo estipula el inciso c) del artículo 98 del con-
trato colectivo de trabajo, pero es improcedente, injus-
to e ilegal que después de diez meses que acontecieron-



los hechos le aplique el artículo 104 de dicho contrato, lo que da motivo a la presentación de esa demanda, por haberlo separado la empresa sin saber los resultados del proceso penal y si se satisficieron o no los presupuestos del precitado artículo 104.

SEGUNDO.- La citada Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, en proveído de 11 de noviembre de 1973, se declaró incompetente para conocer del caso y remitió la demanda laboral a la Junta Federal Permanente de Conciliación Número Uno con residencia en Ensenada, Baja California, la que a su vez y por acuerdo de 14 de marzo de 1975 remitió dicha demanda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

TERCERO.- En el período de arbitraje, durante la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el actor reprodujo su escrito inicial de reclamación.

La empresa demandada, por conducto de apoderado, contestó la reclamación negándola en todas sus partes y en relación con los hechos, agregó: 1o.-Es cierto que el actor ha prestado sus servicios a esa empresa, sin constarle la conducta que expresa haber tenido. 2o.-Es cierto que se encontró en poder del actor un veliz - conteniendo marihuana, lo que así quedó determinado en la sentencia que con fecha 23 de abril de 1973 emitió - el Juez de Distrito de Tijuana, Baja California, en la que se le condenó a tres años de prisión y multa de dos mil pesos. 3o.-También es cierto que al demandante se -

le aprehendió y dictó auto de formal prisión, lo que trajo como consecuencia la sentencia a que antes se hace-- referencia la que en copia certificada se anexa, lo que demuestra la culpabilidad del acusado, hoy demandante.-- 4o.-Es cierto que el actor fue despedido de su trabajo-- conforme a lo estipulado en el artículo 98 del contrato colectivo, con sus consecuencias legales, pero es falso que se haya hecho fuera de los términos estipulados por la Ley, como aduce el actor.

CUARTO.- Una vez concluida la tramitación del juicio, la Junta responsable dictó el laudo reclamado-- cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO.- La parte actora no probó su acción y la demandada sí justificó sus excepciones y defensas.-SEGUNDO.- En consecuencia, se absuelve al Ferrocarril SONORA-BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., de la reclamación hecha por el señor EMIGDIO NICHOLS -- BLANCO.-TERCERO.-NOTIFIQUESE....."

QUINTO.- Inconforme el actor con lo resuelto en el laudo anterior, lo impugnó en la vía de amparo. - Admitida la demanda de garantías y contándose ya con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, se turnaron los autos al Ministerio Público Federal, - quien pidió que se niegue el amparo.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- El acto reclamado es cierto según-- se demostró con los autos originales del expediente laboral que remitió la responsable con su informe justificado.



SEGUNDO.- El concepto de violación que hace valer el quejoso es el que enseguida se extracta:

Que el laudo impugnado es violatorio de lo dispuesto por los artículos 775, 776 y 780 de la Ley Laboral y 14 y 16 Constitucionales, porque la Junta responsable para absolver a la empresa demandada se basó en la copia de las actuaciones deducidas de una causa penal, a pesar de que tal probanza por contener actuaciones de un Tribunal diferente al laboral no pueden tener pleno valor probatorio. Que las de explorado derecho que las pruebas rendidas ante una autoridad distinta a las del trabajo, no pueden surtir efectos en el juicio laboral en virtud de no apegarse a lo dispuesto por las normas que señala la Ley Laboral en cuanto a su recepción y desahogo. Que las actuaciones derivadas del proceso penal que le instruyó el Juzgado de Distrito de Tijuana, cuyo ámbito jurisdiccional es diverso al laboral, para que pudieran tomarse en cuenta, deberían haber sido ratificadas ante la Junta responsable, por lo que al no considerarlo así ésta, lo dejó en estado de indefensión.

Que las pruebas rendidas en un proceso penal no deben tomarse en consideración en el juicio laboral, como así lo estableció la Cuarta Sala de la Suprema Corte en la ejecutoria dictada en el amparo directo 5089/55, promovido por [REDACTED] y fallado el 9 de agosto de 1956 por unanimidad de 4 votos, cuya tesis es la siguiente: "PRUEBAS RENDIDAS EN UN PROCESO PENAL. Es un procedimiento viciado, que hace ineficaces -

las pruebas respectivas, presentar ante la Junta que -- conoce de un conflicto de trabajo, copia certificada de declaraciones testimoniales y dictámenes periciales rendidos en un proceso penal, en vez de hacerlo precisamente ante la autoridad que conoce del juicio laboral, pues en éste las pruebas deben rendirse ante la autoridad jurisdiccional del trabajo conforme a las normas procesales establecidas en la Ley Federal del Trabajo."

Que como la Junta responsable no lo consideró en su laudo, infringió en su perjuicio los preceptos legales y constitucionales antes invocados, por lo que procede el amparo que solicita para el efecto de que dicha Junta emita un nuevo laudo en el que condene a la empresa a las prestaciones reclamadas.

TERCERO.- El anterior concepto de violación es infundado. En efecto, tal y como lo estimó la Junta responsable en su laudo, atento al escrito de demanda y al de contestación a la misma, a la empresa demandada le corresponde la carga de la prueba, la que ofreció, entre otras, la documental consistente en copia certificada de la sentencia definitiva dictada el 23 de abril de -- 1973 en el proceso penal instruido por el Juez de Distrito de Tijuana, Baja California, en contra del ahora-trabajador reclamante Emigdio Nichols Blanco, por delito contra la salud en sus modalidades de posesión y --- transportación de cannabis indica o marihuana, y por el cual y al considerarlo penalmente responsable de su comisión, lo condenó a tres años de prisión y multa de -- dos mil pesos, desprendiéndose del contenido de tal sen



A.D. 2914/79

tencia (fs. 38 a 50), que el actor tenía conocimiento que el veliz contenía marihuana, lo que difiere en esencia de lo manifestado en su demanda laboral en el sentido de que dicho veliz estaba abandonado y que ignoraba su contenido; y si bien es cierto, como lo dice la responsable, "que la causa penal generalmente en materia laboral no hace -- prueba plena," en el caso tiene pleno valor probatorio porque el demandante tenía conocimiento de que el citado veliz contenía marihuana, por lo que es responsable tanto -- penal como laboralmente y dados los términos del artículo 47 fracciones VIII, XI, XIV y XV de la Ley Federal del -- Trabajo, es procedente absolver a la empresa de las prestaciones reclamadas.

Por otra parte, no es verdad que esta Sala en sus precedentes haya dicho que las actuaciones penales no hacen ~~prueba en el~~ procedimiento laboral, sino lo cierto es que lo que se ha dicho es que aunque en un proceso penal se -- absuelva al acusado, esto no implica que se le deba considerar sin responsabilidad en el juicio laboral, por ser -- distinta la materia de un delito, de la responsabilidad y causas de ~~despido~~ laborales. En consecuencia, si de las -- constancias penales aparece la responsabilidad laboral, -- como en el caso a estudio, es procedente considerar el -- despido justificado. Criterio como el anterior lo sostuvo esta propia Sala en el amparo directo 952/71, promovido -- por [REDACTED] y resuelto por unanimidad de 5- votos el 19 de agosto de 1971.

A.D. 2984/79

De consiguiente, siendo infundado el concepto de violación, se está en el caso de negar al quejoso el amparo que solicita.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en -- los artículos 103, fracción I y 107 fracciones II, III inciso a) y V de la Constitución Federal; 44, 45, 46, 158 - y 190 de la Ley de Amparo; 27, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás relativos de dichos Ordenamientos, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a EMIGDIO NICHOLS BLANCO, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo dictado el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y ocho, en el expediente laboral 110/75, seguido por el quejoso contra el Ferrocarril Sonora-Baja California, S.A. de C.V.

Notifíquese; expídase el testimonio conducente, - devuélvase los autos a la Junta de su origen y, en su -- oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió - la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habiendo sido Relator el Ministro David Franco Rodríguez.

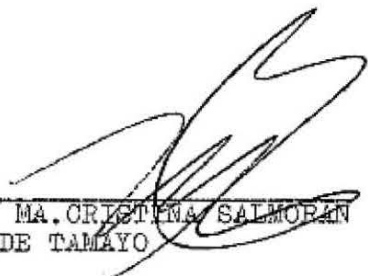
Firman los CC. Presidente y demás Ministros que - integran la Sala con la Secretaría de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.




A.D. 2984/79

EL PRESIDENTE.


LIC. JALISCO VARGAS

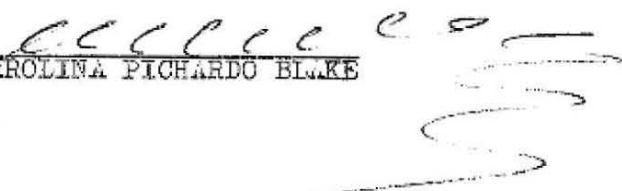

LIC. MA. CRISTINA SALMORAN
DE TAMAYO


LIC. DAVID FRANCO RODRIGUEZ.



LIC. ALFONSO LOPEZ APARICIO


LIC. JUAN MOISES GARCIA.

LA SECRETARIA.


LIC. CAROLINA PICHARDO BLAKE

29 ENE. 1980


Se cancela la resolución anterior a los interesados y al Nacional Financiero.

MLA

En términos de lo previsto en los artículos 116 y 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción II, y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.